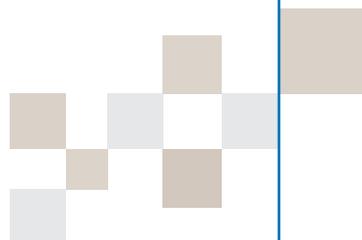


Propuestas de paz territorial desde los movimientos sociales: multiculturalismo, ordenamiento territorial y ejemplos de paz territorial

Leonardo Salcedo García

- En la cuarta reunión del Observatorio de Violencia y Gobernanza se dio un debate y se presentaron propuestas, inquietudes y críticas que las organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas tienen sobre la construcción de paz en Colombia y sobre los retos de la actual mesa de conversaciones entre el gobierno nacional y las Farc. De dicho diálogo se desprenden tres grandes reflexiones.
- Primera: de cara a un escenario de posconflicto, es importante reevaluar el modelo multicultural de reconocimiento de derechos diferenciales y el ordenamiento territorial en Colombia, en tanto variables generadoras de conflictividades violentas.
- Segunda: el mantenimiento de una paz próspera y duradera tras la firma de los acuerdos requiere el análisis profundo del modelo de desarrollo nacional y sus efectos sobre las condiciones de inequidad y riqueza en el país.
- Tercera: actualmente tienen lugar iniciativas y ejercicios de paz en múltiples territorios, muchas de ellas surgidas desde el movimiento y las organizaciones sociales, así como desde las instituciones nacionales y departamentales. La elaboración de propuestas para construir paz territorial debe tener en cuenta estas experiencias, articularlas, proyectarlas y trabajar sobre sus acumulados.





Contenido

Introducción	5
Retos del multiculturalismo colombiano y el ordenamiento territorial	6
¿Qué es la paz desde la perspectiva del movimiento social?	9
Visiones actuales sobre el proceso de paz	11
Propuestas y alternativas desde las organizaciones sociales del suroccidente	12
Conclusiones y debates	13







Introducción¹

La cuarta reunión del Observatorio de Violencia y Gobernanza tuvo lugar en la universidad Icesi, en Cali, el 7 y 8 de octubre del 2015. En el panel “Propuestas de construcción de paz” se dio un debate en el cual, a partir de un diálogo franco entre académicos, miembros de la Armada Nacional, el Ejército y la Policía, representantes de empresas de la región, funcionarios de diversas entidades estatales, miembros de ONG y entidades internacionales, y movimientos sociales, se lograron establecer algunas propuestas, inquietudes y críticas que las organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas tienen sobre la construcción de paz en Colombia, y los retos de la actual mesa de diálogo que en estos momentos se adelanta en La Habana entre el gobierno nacional y las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

¿Qué significa la paz en Colombia? La respuesta a esta pregunta está lejos de ser sencilla. Por el contrario, implica una reflexión sobre la historia del país y el conflicto o los conflictos que en él han perdurado, un análisis sobre los grupos de presión y sus intereses económicos y políticos, un diagnóstico sobre la situación de pobreza, miseria, desplazamiento, violaciones a los derechos humanos, y una discusión amplia sobre el modelo de desarrollo que se ha implementado y se pretende implementar. Toda respuesta rigurosa, sea cual sea su contenido, debe pasar por estos aspectos y, para decirlo en pocas palabras, supone pensar el país integralmente, para entender qué puede o debe implicar el fin de un conflicto armado que cumple más de cinco décadas.

Sobre qué significa la paz, qué se necesita para lograrla en Colombia y qué propuestas han formulado

y vienen implementando los movimientos sociales para construirla, versará este documento, el cual formula unas observaciones sobre los retos que tiene la construcción regional y territorial de paz.

La primera es que es necesario revisar dos elementos fundamentales de la institucionalidad colombiana y de la estructura de su sociedad, a saber, el modelo multicultural de reconocimiento de derechos diferenciales, el cual si bien ha traído avances significativos en el reconocimiento colectivo cultural y político de las comunidades indígenas y afrodescendientes, ha traído también una serie de inequidades entre los sectores sociales que han afectado las relaciones entre campesinos, indígenas y afrodescendientes, y ha generado conflictos. Por otro lado, es necesario revisar el ordenamiento territorial en Colombia, donde las condiciones de inequidad en la tenencia de la tierra y el acceso a subsidios y demás apoyos institucionales a la producción agraria siguen siendo una de las causas que dieron origen y mantienen el conflicto armado. El éxito de los acuerdos de paz a largo plazo dependerá de avanzar paulatinamente en la transformación de estas condiciones de acceso a los derechos sociales, en el reconocimiento colectivo de las comunidades y en cambios en la estructura de tenencia de la tierra y distribución de la riqueza.

La segunda tesis tiene que ver con las visiones que tienen los movimientos sociales sobre la paz: para ellos, esta va mucho más allá del fin de la guerra. Afirman que en un país como Colombia no es posible pensar la paz sin tener en cuenta el modelo de desarrollo y sus consecuencias sobre la inequidad secular que ha vivido durante cientos de años.

La tercera observación es que en los territorios ya se vienen desarrollando iniciativas y ejercicios de paz, muchas de ellas surgidas desde el movimiento y las organizaciones sociales, pero también desde las instituciones nacionales y departamentales. La elaboración de propuestas para alcanzar la paz territorial debe tener en cuenta estas experiencias, articularlas, proyectarlas y trabajar sobre sus acumulados.

¹ Este texto es producto de las discusiones a puerta cerrada entre líderes de la sociedad civil, representantes del sector empresarial, la academia, la fuerza pública y diversas entidades del estado, en el marco de la cuarta reunión del Observatorio Colombiano de Violencia y Gobernanza, auspiciado por la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia. El carácter confidencial de la metodología de dicha reunión dispuso la reserva de las fuentes, por lo que las afirmaciones de este texto no se le asignan a ningún participante en particular.



Por último, se expondrán algunas de las propuestas que se vienen adelantando en el departamento del Cauca, que ilustran diversas formas en que la sociedad civil está proyectando la construcción de paz en los territorios.

Retos del multiculturalismo colombiano y el ordenamiento territorial

Este apartado gira en torno al ordenamiento territorial nacional, regional y local, y a los numerosos retos que impone el panorama del posconflicto para el desarrollo rural en Colombia. A partir de un análisis cartográfico que ha hecho parte de las investigaciones del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, se evidencia cómo se han generado traslapes territoriales entre las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, las empresas y las áreas de protección ambiental.

Esta reflexión parte de un análisis a diferentes escalas frente al ordenamiento territorial y al desarrollo rural, en clave de los retos del país, las regiones y localidades en el llamado posconflicto.

La tesis consiste en que en Colombia se ha aplicado un *modelo multicultural* de reconocimiento de derechos diferenciales a comunidades étnicas, pero no un *modelo intercultural* que permita la relación entre las mismas, por lo que en la práctica este modelo –que para las comunidades indígenas es muy amplio, para las afrodescendientes lo es en menor medida y para las campesinas lo es mucho menos², hace que se establezca una inequidad en el acceso a los derechos, lo cual genera que las relaciones sean desiguales, toda vez que cuando se

busca acceder a la tierra, a programas estatales o a recursos, las condiciones son disímiles y existen ventajas de un grupo étnico o cultural sobre el otro.

Es necesario tener en cuenta también la situación de la territorialidad indígena, afrodescendiente y campesina en el país (mapa 1). Mediante el uso de mapas, es posible observar cómo, si bien las comunidades indígenas tienen casi treinta millones de hectáreas constituidas en resguardos, la gran mayoría de estas tierras están dedicadas a actividades de conservación por parte de las comunidades de la región amazónica y de la Orinoquia, así como también una gran cantidad está ubicada en el litoral del Pacífico, siendo usada con el mismo fin de protección ambiental.

Las comunidades afrodescendientes, por su parte, tienen bajo la figura de titulación colectiva un poco más de cinco millones de hectáreas, prácticamente todas ubicadas en el litoral Pacífico, donde se dedican a la agricultura y, sobre todo, a la pesca, y recientemente a la explotación minera. Una de las mayores reivindicaciones de las comunidades afrodescendientes es la realización de las titulaciones colectivas para consejos comunitarios en los valles interandinos, las cuales están represadas por la falta de reglamentación de varios de los artículos de la ley 70 de 1993 y, principalmente, por falta de voluntad política.

Finalmente, las comunidades campesinas viven la problemática de no estar representadas claramente en las estadísticas oficiales, ya que el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) no ha aceptado incluir en sus censos la categoría “campesino” dentro de la caracterización de identidad poblacional. Actualmente, la ley 160 de 1994 plasma la figura de zona de reserva campesina como la única opción de territorialidad colectiva del campesinado, la cual si bien dista en muchos de sus detalles de las figuras de resguardo indígena y titulación colectiva afrodescendiente, sí se dispone como una figura de ordenamiento territorial que blinda los territorios para la producción de alimentos y regula el tamaño de la propiedad rural, guiándose por la unidad agrícola familiar. Actualmente, en el país hay casi

2 Las comunidades indígenas y afro están amparadas por la Constitución política de 1991 y las leyes 21, del mismo año, las primeras, y 70 de 1993, las segundas. Por su parte, las comunidades campesinas sin particularidades étnicas solo están mencionadas como “trabajadores agrarios” en la Constitución política y en el título XIII de la ley 160 de 1994, en la parte que reglamenta las zonas de reserva campesina.



ochocientos treinta y ocho mil hectáreas constituidas como zonas de reserva campesina.

Lo anterior es solo el panorama actual de las territorialidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en el ámbito nacional. A lo que se deben sumar las pretensiones territoriales de los tres sectores, las cuales tienen que ver con la ampliación y la constitución de nuevos resguardos indígenas, además de la clarificación de los de origen colonial y republicano, sobre todo en los departamentos del Cauca y Nariño.

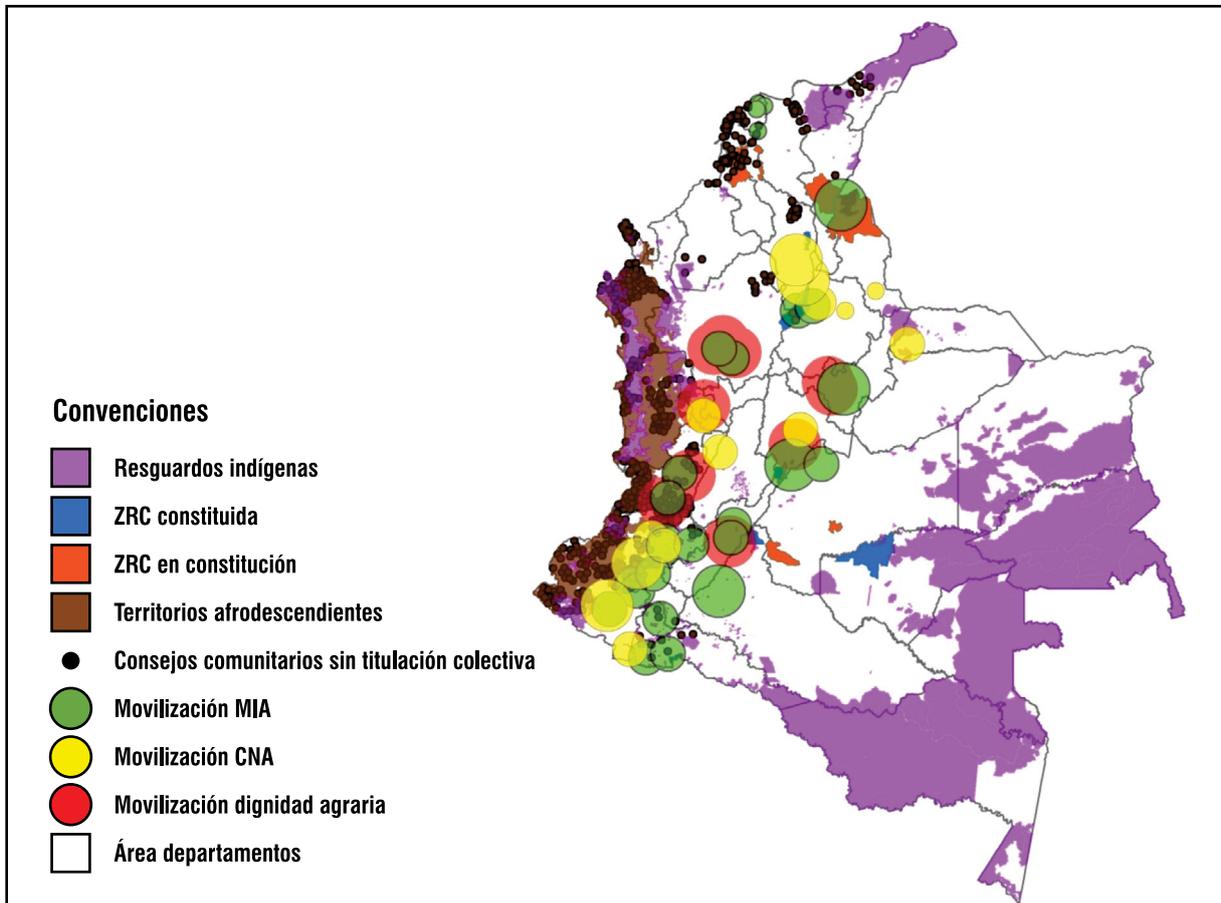
Por parte de las comunidades afro, como se dijo, se pretende la titulación colectiva de territorios de los consejos comunitarios en los valles interandinos.

Y por parte de las comunidades campesinas hay más de cincuenta solicitudes de constitución de zonas de

reserva campesina en todo el país, adelantadas por algunas organizaciones que han hecho uso de esta figura, así como también por otras que vienen planteando una nueva figura de ordenamiento territorial llamada territorios agroalimentarios, la cual además de convertirse en una figura existente en la legislación colombiana, también busca serlo en diferentes regiones del territorio nacional.

En suma, las pretensiones territoriales, junto a las históricas necesidades de tierra de los sectores agrarios, y las condiciones de pobreza persistentes del campo colombiano, así como la ya expuesta inequidad en el acceso a los derechos por parte de indígenas, campesinos y afrodescendientes, están generando un caldo de cultivo para conflictos y tensiones entre comunidades en cada vez más regiones y departamentos del país. Saber tratar y gestionar estos con-

Mapa 1. Territorialidades indígenas, afrodescendientes y campesinas



Fuente: Instituto de Estudios Interculturales, PUJ, Cali.



flictos será clave a la hora de implementar propuestas territoriales luego de la firma de los acuerdos de paz con la insurgencia.

Luego de pasar por el panorama nacional podemos centrar la mirada y el análisis en el departamento del Cauca, encontrando cómo allí existe un creciente traslape territorial tanto en las presencias actuales de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, como en sus aspiraciones. Podemos ver también cómo el territorio lo comparten no solo habitantes rurales de distintas categorías: indígenas, afrodescendientes y campesinos, sino también con empresas y diversos proyectos agroindustriales con los que las comunidades también tienen numerosos conflictos sobre el manejo de los recursos naturales, las responsabilidades tributarias de las empresas, los modelos de contratación laboral, entre un sinnúmero de críticas e inquietudes que se expresan por la presencia de empresas agroindustriales y mineras en el departamento del Cauca.

De esta manera se entiende cómo se han presentado también conflictos por el uso del suelo con el estado, debido a que una parte considerable del departamento, sobre todo en las cordilleras Occidental y Central, es zona de reserva forestal de ley 2a, la cual prohíbe las actividades productivas en estas zonas y solo permite la presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes para labores de conservación, no permitiendo a las comunidades campesinas ni habitar ni, mucho menos, producir en estos territorios (mapa 2).

De tal manera que las problemáticas estructurales como el acceso a la tierra y la inequidad en el acceso a los derechos se combinan con los traslapes y aspiraciones territoriales de las comunidades, sus relaciones de conflicto con muchos de los proyectos agroindustriales presentes en el territorio y con la legislación de protección ambiental que permite solo un tipo de uso del suelo en diversas áreas. Estas condiciones generan, como se dijo, un caldo

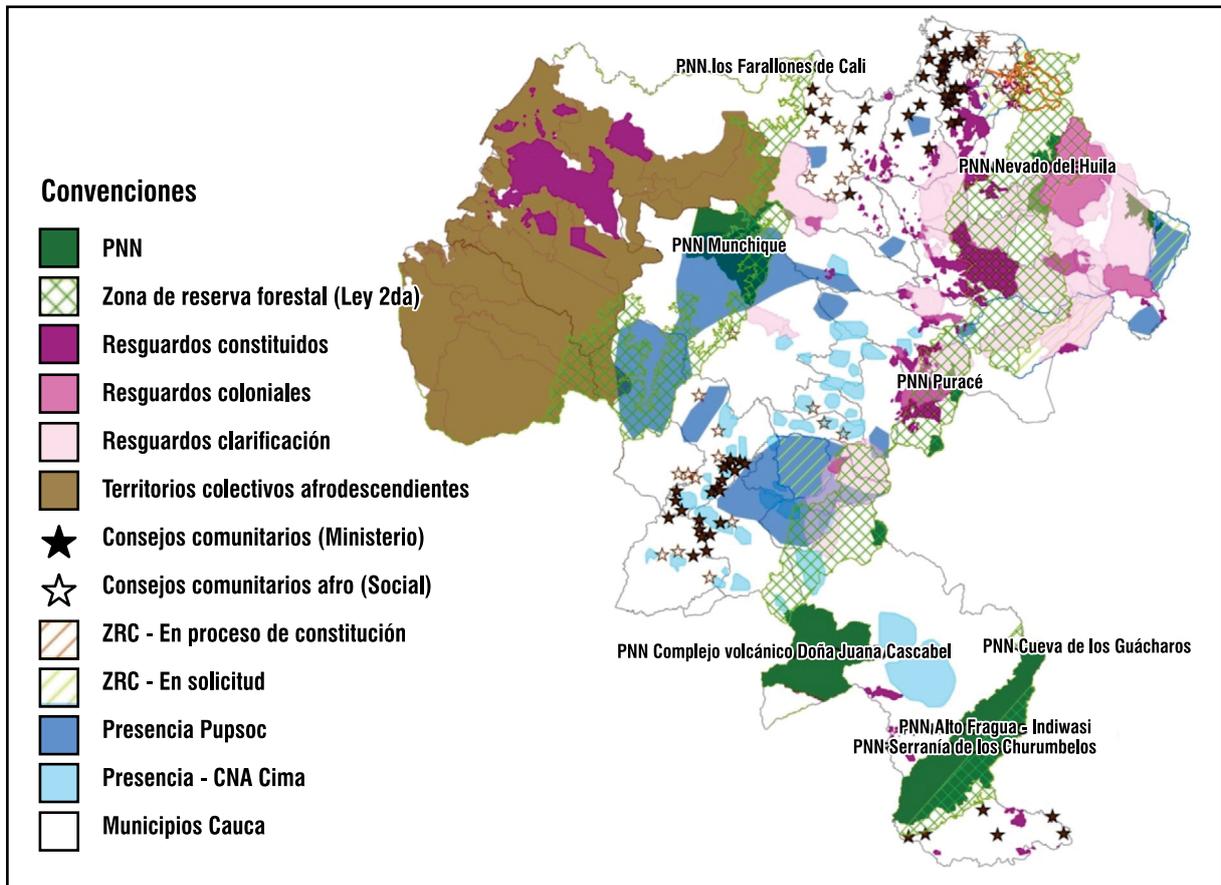
de cultivo para conflictos crecientes por el territorio, y plantean retos concretos de ordenamiento territorial, legislación agraria y políticas públicas de gestión de conflictos tanto para el caso del departamento del Cauca como para el ámbito nacional.

Finalmente, presentamos algunos de los principales retos para el escenario del posacuerdo y la construcción de paz territorial:

1. El ordenamiento territorial y el desarrollo rural en Colombia tienen el reto de reordenar la legislación y la institucionalidad agraria pensando la cuestión de la interculturalidad como la generación de escenarios de encuentro y cooperación entre las comunidades rurales.
2. Cómo ganar en eficacia y rigor en el accionar de las entidades estatales agrarias, que requieren una reestructuración institucional.
3. La necesidad de que las organizaciones se cualifiquen técnicamente de manera tal que puedan liderar los procesos complejos de adecuación de la ruralidad a la nueva realidad de un país sin guerra.
4. El establecimiento de relaciones económicas entre las territorialidades comunitarias (resguardos, titulaciones colectivas, zonas de reserva campesina, territorio agroalimentarios, etcétera) y el emprendimiento de proyectos para la producción de alimentos que sean una opción para todo el país.
5. Que las organizaciones sociales se preparen para ser gobierno, ya que si pretenden que sus proyectos políticos para la ruralidad se materialicen, deben empezar a ser opción de gobernabilidad en los territorios, lo cual implica no solo un discurso de oposición frente al modelo de desarrollo, sino proyectos que se puedan realizar técnicamente para ir materializando sus propuestas para la ruralidad colombiana.



Mapa 2. Territorialidades indígenas, afrodescendientes y campesinas junto a áreas protegidas en el departamento del Cauca



Fuente: Instituto de Estudios Interculturales, PUJ, Cali.

¿Qué es la paz desde la perspectiva del movimiento social?

La paz es una idea muy general. La definición de diccionario la plantea como la ausencia de guerra, de violencia o bien como un estado apacible, es decir, tranquilo y deseable. También se puede entender como quietud o calma.

Es claro que para el caso colombiano la paz implica obligatoriamente salir de la guerra, ponerle fin al conflicto armado que se cuenta por décadas y en el que intervienen directamente numerosos actores como la insurgencia, el estado, los grupos paramilitares o las hoy llamadas “bandas criminales”, e indirectamente prácticamente toda la sociedad, comu-

nidades rurales y urbanas, organizaciones sociales, la iglesia, las clases económicas y gremios de productores, los medios de comunicación, las fuerzas armadas, los políticos y los partidos políticos, etcétera.

Sin embargo, para muchos de estos actores la paz no puede ser solo el fin de la guerra, sino el tratamiento de las causas que la originaron y la han mantenido, condiciones que se asientan en la estructura política y económica del país, condiciones que están enraizadas también en la cultura y las tradiciones. Un país que lleva más de cinco décadas en guerra necesariamente debe transformarse a sí mismo para salir de ella, debe desacostumbrarse a ella. Ese proceso llevará décadas y requerirá acuerdos, propuestas innovadoras, creativas, que logren configurar nuevas relaciones sociales, que hagan posible un país donde para saldar debates o diferencias políticas no sea



necesaria la violencia, donde el disenso se tramite dialogando y no con las armas.

A continuación se resumen las posiciones de organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas sobre la paz.

Para algunas organizaciones campesinas del Cauca, la paz es un proceso, un camino que va mucho más allá de la firma de los acuerdos de terminación de la guerra entre el estado colombiano y la insurgencia. La paz implica la participación efectiva de los movimientos y organizaciones sociales en las decisiones que se tomen local, regional y nacionalmente; supone también plantear salidas efectivas a las causas estructurales del conflicto, que se enraízan en la falta de garantías para la oposición y la movilización social, en la inequidad en el acceso a la tierra, en la extracción desmedida de los recursos naturales por parte de los grandes negocios nacionales y transnacionales. Implica asimismo plantear mecanismos de diálogo y resolución de conflictos que surjan entre las comunidades.

En conclusión, la construcción de paz implica un debate entre todos los actores en las escalas local, regional y nacional sobre el modelo de desarrollo que se implementa y cómo este permite la inclusión política, económica y cultural de los diversos actores que confluyen en los territorios y en el país.

Líderes de las organizaciones afrodescendientes del norte del Cauca resumen de manera muy sencilla y profunda su visión de la paz. Afirman que “la paz es poder vivir bien, trabajar tranquilos y relacionarse tranquilamente con el vecino, sin miedo a que lo maten o a que lo saquen de territorio”. Asimismo, afirman que el método para construir paz territorial es igual de sencillo: “la paz se construye conversando con los demás, escuchando y planteando claramente sus visiones del territorio”. Con estas frases, que parecen simples, algunos dirigentes recogen años de experiencia organizativa en uno de los consejos comunitarios más sobresaliente del país, merecedor de

reconocimientos nacionales e internacionales como constructores de paz y defensores de derechos humanos, y el cual hereda las luchas de comunidades afrodescendientes desde hace décadas e, incluso, siglos.

Afirman que la paz verdadera, la paz integral que anhelan las comunidades es una en la que se toque con claridad el modelo económico y de desarrollo que se implementa en los territorios, el cual debe partir por entender que el territorio no es fuente de riqueza acumulativa, y que si bien se pueden llevar a cabo iniciativas económicas como la minería, estas deben partir del cuidado del territorio y la naturaleza, ya que, afirman, como se viene desarrollando, este modelo ha implicado la contaminación de los recursos hídricos, pero también la contaminación de las comunidades por la llegada del dinero, la droga, la violencia, la prostitución, el alcoholismo, etcétera.

En este sentido, afirman que la paz no solo se debe hacer desde el diálogo entre el estado y la insurgencia, y que si bien celebran que este proceso se esté llevando a cabo, no es suficiente, toda vez que requiere la visión del constituyente primario, es decir de las comunidades, para que digan qué se necesita para construir la paz en los territorios.

Algunas organizaciones indígenas del Cauca vienen planteando que “este conflicto no es nuestro”, pero que para resolverlo sí es necesario contar con su voz, ya que ellas han sido las principales afectadas por estas situaciones y serán quienes vivan en carne propia las consecuencias de lo que se acuerde en La Habana. Asimismo, señalan que si bien saludan el proceso de negociaciones en La Habana, esta negociación ha carecido de la participación real de las comunidades, razón por la cual estas organizaciones miran con recelo y cautela lo que se está acordando, ya que el proceso de paz traerá a los desmovilizados de la guerrilla a los territorios, y esta llegada, así como otros detalles de los acuerdos, deberían ser concertados con las comunidades que los habitan ancestralmente.



Visiones actuales sobre el proceso de paz

Para las organizaciones sociales es casi un consenso que cuanto antes deben acallarse los fusiles y silenciarse las armas. Sin embargo, el cómo y el qué implica lo que se negocia en La Habana y en una posible mesa que se inicie con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) plantea debates, inquietudes y críticas por parte de las comunidades y organizaciones sociales del suroccidente colombiano.

Para las organizaciones campesinas es necesario que el desarrollo de los acuerdos que se logren con la insurgencia no vaya en contravía de las exigencias de las organizaciones y movimientos sociales, enfatizando la reivindicación porque en la ley se reconozcan los derechos del campesinado, como un paso necesario para equiparar estos derechos, los de las poblaciones campesinas, con los de las comunidades afrodescendientes e indígenas. En este sentido ya se está avanzando tanto en las Naciones Unidas como en la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en buscar mecanismos nacionales e internacionales para el reconocimiento integral, en la legislación, de los derechos de las poblaciones campesinas.

Adicionalmente, en el país es urgente contar con alternativas claras a los cultivos de coca, marihuana y amapola, de manera tal que los campesinos tengan garantías plenas de que ni su salud ni sus tierras se verán afectadas por las fumigaciones, pero también de que habrá opciones reales de transición a otros cultivos que les permitan vivir dignamente.

Este ejercicio debe estar articulado necesariamente a proyectos productivos, adecuación de vías y creación de infraestructura que les permitan a las comunidades que hoy dependen de los cultivos de uso ilícito vivir dignamente a partir de la producción y comercialización de alimentos.

Asimismo, aun cuando se celebran y respaldan las negociaciones con la insurgencia y se reconocen muchos de los puntos hasta ahora acordados en la

mesa de La Habana, consideran necesario dejar en claro que esta no es ni puede ser vocera de los movimientos sociales. Por tanto, es indispensable que se habiliten canales de comunicación y diálogo en los que las organizaciones y los movimientos sociales expongan al gobierno y a la sociedad sus visiones de la paz y sus propuestas para construirla territorialmente.

Las organizaciones afrodescendientes denuncian las condiciones de pobreza en las que viven las comunidades en el norte del departamento del Cauca, muestran cómo la hidroeléctrica de la Salvajina desplazó a ocho mil familias y cómo actualmente la población que vive en sus inmediaciones no cuenta con acueducto y paga un servicio muy caro de energía eléctrica. Denuncian cómo en el territorio se siguen presentando amenazas por parte de grupos paramilitares, al punto que, en los años que llevan como líderes comunitario, algunos dirigentes han recibido cerca de treinta amenazas a su vida, y otros se han visto obligados a desplazarse de sus territorios por amenazas contra la misma.

Afirman que el estado colombiano tiene muchas deudas históricas con las comunidades afrodescendientes, y que este proceso de paz debe permitir atender estas situaciones, para resolver las problemáticas de la población. Cuentan que tuvieron una delegada de las víctimas afro en La Habana, y que si bien este ejercicio fue necesario y valioso, es insuficiente para plantear las reparaciones colectivas necesarias que requieren las comunidades afrodescendientes del norte del departamento del Cauca.

Finalmente, concluyen que la paz territorial es la base para la construcción de la paz en el país, que cuando se lucha por los derechos, por condiciones de vida digna y por la defensa y el cuidado de la naturaleza en el norte del departamento se está luchando por la defensa de los derechos de todas las comunidades de la región y, en general, del país. Enfatizan en que el territorio es la fuente de la vida, y que al defenderlo se defiende también la vida de las comunidades local, regional y nacionalmente.



“Al menos ya no se escuchan tantas balas en los territorios”. Así resumen algunos líderes indígenas su visión sobre el proceso de negociaciones que se adelanta en La Habana. Afirman que saludan los diálogos y los consideran de suma importancia para lograr una mejor vida en los territorios. Asimismo, explican cómo en la visión de las comunidades indígenas esta guerra la han hecho otros, este conflicto ha estado en manos del estado, los paramilitares y las guerrillas, y las comunidades han quedado en medio de la guerra como víctimas, siendo desplazadas, masacradas, reclutadas forzosamente y victimizadas de diferentes maneras.

Otro asunto que preocupa a las comunidades indígenas son las condiciones y los proyectos de la insurgencia una vez deje la lucha armada y se convierta en movimiento político. Dicen, con cautela, que el movimiento indígena no va a permitir que se afecte su autonomía o su territorialidad, por lo que invitan al gobierno y a la insurgencia a que escuchen sus posiciones y propuestas.

Propuestas y alternativas desde las organizaciones sociales del suroccidente

Las organizaciones campesinas señalan la importancia del proceso que ha venido construyendo desde el año en curso el llamado Espacio regional de paz del departamento del Cauca. Con el liderazgo de diversas organizaciones sociales departamentales, junto a la Gobernación del Cauca, se ha abierto un espacio de elaboración y desarrollo de propuestas de paz, cuyo primer objetivo ha sido hacer una agenda colectiva de paz que recoja las visiones, las inquietudes y las propuestas de las comunidades de cada uno de los municipios. Para esto se han escogido gestores de paz en cada uno de ellos, que junto con un equipo de la gobernación y las organizaciones sociales participantes se encuentran viajando por todos los municipios, encontrándose con las comunidades locales y sistematizando sus visiones y propuestas de paz.

De tal manera que con las visiones de las comunidades locales, el Espacio regional de paz pretende construir una agenda programática conjunta, mesas sociales por la paz en todo el departamento, diálogos intersectoriales con comunidades y empresas y acciones humanitarias en territorios que así lo requieran, dándole prioridad a actividades de desminado. Asimismo, pretende fomentar y fortalecer la presencia estatal en el territorio a partir de programas interinstitucionales que articulen a las alcaldías, los concejos municipales, a la gobernación del departamento del Cauca y a entidades de orden nacional. De tal manera se pretende establecer un diálogo en el cual las organizaciones sociales, el estado y las empresas se pongan de acuerdo para desarrollar programas que construyan paz territorial en todo el departamento.

Las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca han elaborado también propuestas para recoger los aprendizajes de la minería artesanal ancestral y cómo esta puede ser un ejemplo para plantearse un modelo minero que no arrase la naturaleza y contamine las fuentes de agua, tal como lo vienen haciendo la minería ilegal y la legal a gran escala. Proponen entonces que en el marco de los acuerdos de paz haya una moratoria minera que congele las adjudicaciones de nuevos títulos y se establezcan mecanismos que fortalezcan la consulta previa a las comunidades para que estas decidan dónde y cómo hacer la minería y las otras actividades económicas.

Narran también cómo fue la experiencia de la “marcha de los turbantes”, en la que decenas de mujeres del consejo comunitario La Toma marcharon a Bogotá para exigirle al estado respuestas claras sobre cómo impedir que se siga expandiendo la minería ilegal en el territorio, y afirman que aún están a la espera del cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos.

Las comunidades indígenas, por su parte, vienen desarrollando diversas iniciativas de paz territorial. Por un lado, hablan de iniciativas productivas comunitarias, en las que la producción agrícola y la trans-



formación y comercialización de los productos indígenas se plantea como una opción de vida digna. Muestran también cómo las comunidades indígenas del norte del Cauca hacen parte de los diversos procesos que en esa zona y otras del departamento vienen adelantando los sectores sociales para la construcción de paz, tanto en el Espacio regional de paz como en otras iniciativas.

De igual manera, en su última asamblea se establecieron tres mandatos en torno a la construcción de paz en el territorio:

1. La construcción de paz interna, que implica la armonización dentro de las comunidades indígenas, para superar sus diferencias y fortalecer la unidad en las organizaciones y cabildos.
2. Adelantar procesos de acercamiento y unidad con comunidades afrodescendientes y campesinas, afirmando que las tres son víctimas del conflicto armado y del modelo económico imperante en el país, enfatizando en que de la movilización conjunta saldrán las propuestas de cambio que el país y la región necesitan para la construcción de paz.
3. La defensa del territorio y la liberación de la madre tierra, enfrentando el modelo que imponen las grandes empresas y agronegocios, que afecta el territorio y daña la naturaleza. Frente a lo anterior, proponen acciones de movilización conjunta con campesinos y afros en las que se ponga como centro la inequidad en el acceso a la tierra en la región.

Conclusiones y debates

Los voceros y representantes de los movimientos sociales del suroccidente colombiano que asistieron al panel mostraron diversos matices sobre lo que para ellos significa construir la paz.

Aun cuando reconocen como avances fundamentales los acuerdos que se han logrado en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc,

manifiestan inquietudes y críticas, empezando por la desconfianza que les genera no haber hecho parte de los acuerdos. Insisten asimismo en que si no se superan las causas del conflicto: inequidad en el acceso a la tierra, condiciones de pobreza, falta de atención del estado en muchas regiones y dificultades para la participación política por parte de numerosos sectores del país, no se solucionará de fondo el conflicto, y ello permitirá que surjan nuevos grupos armados.

Todos los representantes de las comunidades celebran o saludan los diálogos de paz entre el estado y la insurgencia, así como las consecuencias de ello en cuanto a la disminución de la violencia y las acciones propias del conflicto en los territorios. Sin embargo, coinciden también en que el proceso ha carecido de la participación de las comunidades, y afirman que la implementación de los acuerdos en los territorios debe contar con la participación y las propuestas de las organizaciones sociales locales y regionales.

Existen diferencias menores entre las visiones de algunos líderes indígenas y las de algunos líderes campesinos. Los primeros afirman que “este conflicto no es nuestro” y que las comunidades han sido víctimas de una guerra que no empezaron, mientras que algunas organizaciones enfatizan en que las causas que originaron el conflicto armado siguen vigentes y las comunidades son un actor que debe exigir la superación estas causas, profundamente relacionadas con el modelo económico y de desarrollo, para que la paz en los territorios sea completa.

Este último punto generó un debate: hay una tendencia a confundir la construcción de paz o la salida de la guerra con un debate frente al modelo de desarrollo. De ser así, ¿estos son debates diferentes que no se pueden cruzar? Se dijo entonces que lo primero es el silenciamiento de los fusiles, y que si se confunde esto con cambios estructurales en el modelo de desarrollo se corre el riesgo de no lograr ninguna de las dos cosas.

Frente a lo anterior, la mayoría de miembros de las organizaciones sociales sostienen que no hay tal



confusión, ya que las reivindicaciones de las comunidades son para lograr una vida digna en los territorios, por lo cual afirman que si la construcción de paz no pasa por ir superando las inequidades en el disfrute de derechos, el acceso a la tierra, la inclusión y la participación política, probablemente surgirán nuevos conflictos, producto del mantenimiento de estas condiciones. Así pues, afirman que si bien el primer paso urgente debe ser el fin de la guerra y el silenciamiento definitivo de los fusiles, es fundamental no parar allí, sino continuar con la construcción de alternativas que les permitan a las comunidades vivir mejor y hacerse cargo del futuro de sus territorios y sus proyectos colectivos.

En conclusión, es posible afirmar que mientras en La Habana se han logrado algunos acuerdos y reflexiones sobre qué implica y qué es necesario transformar en el país para lograr la paz, desde las regiones colombianas, en particular desde el suroccidente, se vienen planteando diversos debates, iniciativas y crí-

ticas a este ejercicio, y existen comunidades rurales organizadas y dispuestas a construir formas de materializar la paz en el país.

Así pues, el reto está en que las instituciones estatales, los partidos políticos, la comunidad internacional, el empresariado y las organizaciones sociales, de manera conjunta, apunten iniciativas para construir una región y un país donde los disensos y las diferencias se tramiten políticamente y sin recurrir a las armas o a la violencia.

Porque, como decía el maestro Estanislao Zuleta en su ensayo "*Sobre la guerra*":

Una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz.





Acerca del autor

Leonardo Salcedo García. Antropólogo por la Universidad Nacional de Colombia. Finaliza la maestría en desarrollo rural en la Universidad Javeriana.

Investigador del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.

Pie de imprenta

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Calle 71 n° 11-90 | Bogotá-Colombia

Teléfono (57 1) 347 30 77

Fax (57 1) 217 31 15

Para solicitar publicaciones:

Fescol@fescol.org.co

Bogotá, diciembre de 2015

ISSN 2422-0663

Presente en Colombia desde 1979, Fescol trabaja por crear un espacio de reflexión y análisis de la realidad nacional, promoviendo el trabajo en equipo y la creación de alianzas institucionales con universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticas progresistas que garanticen la participación de actores locales, nacionales e internacionales con una visión común de la democracia y pluralidad política.

Asimismo, busca dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos regionales y nacionales en la construcción colectiva de alternativas pacíficas; promueve el análisis y el debate de las políticas públicas y apoya procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales en temas como sostenibilidad y medio ambiente, desarrollo económico, fortalecimiento de los partidos y sistemas políticos, entre otros.

Los resultados de estos esfuerzos se ven materializados en la publicación de documentos de propuesta, análisis temáticos y libros, en los grupos de trabajo con expertos (académicos y técnicos), y en la realización de foros, seminarios y debates públicos.

El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES.

Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Friedrich-Ebert-Stiftung.